

3-COMP-2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las catorce horas y veinticinco minutos del día catorce de marzo de dos mil once.

El presente conflicto de competencia negativo se ha suscitado entre el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla y Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, en el proceso penal instruido en contra de los señores **Víctor Manuel Gámez, José René Flores Gámez y José María Flores Gámez**, por atribuirseles la comisión del delito calificado provisionalmente como **homicidio agravado**, previsto y sancionado en el artículo 129 N° 3 en relación con los artículos 24 y 128 del Código Penal, en perjuicio de [...].

Analizado el proceso y considerando:

I. Por medio de la resolución de las catorce horas del día diez de diciembre de dos mil diez, agregada a folio 178 del expediente con referencia C/B 648-10 (4), el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla se declaró incompetente en razón de la materia para conocer del referido proceso penal.

A ese respecto, la autoridad judicial expresó: "[a]nalizando las presentes actuaciones, denota el Suscrito, que la conducta atribuible a los justiciables, se enmarca dentro de la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, circunstancia no considerada por la representación Fiscal, al no hacer referencia en cuanto a la no aplicación de la normativa en referencia, de carácter especial, **la cual (...) ha sido promulgada para los delitos específicamente enunciados en la misma, y que por ministerio de ley corresponde su conocimiento, a los Tribunales especializados**, por lo que a juicio prudencial del Suscrito Juez, el presente proceso, reúne la condición objetiva de aplicación de la ley invocada..." (sic) (resaltado suplido). Asimismo, agregó: "[p]or otra parte, **la realización compleja del hecho que se investiga, puede perfectamente acreditarse o descartarse, durante el plazo de instrucción** que la autoridad Jurisdiccional especializada tenga a bien conceder..." (sic) (resaltado suplido).

II. Por su parte, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, mediante resolución de las ocho horas y cuarenta minutos del día veintiuno de diciembre de dos mil diez, agregada a folios 180 y 181 del proceso penal antes relacionado, se declaró incompetente en razón de la materia para conocer del proceso penal en mención.

En tal resolución, y después de exponer qué debe entenderse por crimen organizado, la

autoridad judicial expresó: "...la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, establece dos modalidades de competencia o conocimiento de hechos delictivos, la Primera, que el hecho sea producto del Crimen Organizado; y la segunda que el delito sea de realización Compleja..." (sic).

A ese respecto, señaló: "[e]s opinión de esta Juzgadora en relación a la segunda modalidad, que la complejidad a la que hace relación dicha ley, no refiere al hecho que por encontrarse frente a los injustos penales antes anotados, sea de el conocimiento de un tribunal Especializado, ya que el espíritu de la misma, es combatir el crimen organizado (...) ya que **la complejidad debe de extenderse no solo a los elementos o circunstancias anotadas en el Inc 3 del Art. 1 de la LCODRC, sino también y lo más importante, a la investigación (...) que para tales efectos haya realizado o este por realizar la Fiscalía General de la República, es decir lo dificultoso que le será llegar a la verdad real del hecho (...)** y en tal caso no nos encontremos frente a un delito de realización compleja (...) Por otra parte, respecto a la modalidad primera, (...) para determinar si nos encontramos ante un hecho de competencia especializada por haber sido cometido bajo la modalidad o forma de ejecución perteneciente al crimen organizado, **deben de estar establecidos dichos elementos dentro del proceso [existencia de un grupo estructurado, la participación de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo, que actúen concertadamente y distribución de tareas], lo cual en el presente caso no han sucedido**, ya que de no estar determinados nos encontramos frente a un delito ordinario, el cual para su conocimiento no requiere una competencia especializada como la de éste Tribunal..." (sic) (resaltado suplido).

Y en referencia a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja —en adelante ley especial— la juzgadora expuso: "... la ley en comento concede a la Fiscalía General de la República, la facultad de considerar conforme a las diligencias de investigación, si el caso debe ser puesto a conocimiento de un Tribunal Especializado, o de un Juez de Paz, y **en el presente caso se entiende que a criterio de la Representación Fiscal, el hecho debe de ser del conocimiento de la Jurisdicción común, por considerar que el mismo no revestía la modalidad de Crimen Organizado**, lo cual se concluye porque a la fecha en que el hecho se suscitó ya se encontraba en vigencia la normativa especializada, no obstante el Agente Fiscal presenta el requerimiento ante la jurisdicción común..." (sic) (resaltado suplido).

III.- Debe acotarse, de manera liminar, que a partir del día uno de enero del corriente año entró en vigencia el Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo No. 733, de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, el cual de acuerdo con su artículo 505 inciso 1° derogó el Código Procesal Penal aprobado en mil novecientos noventa y seis.

En ese sentido, debe señalarse que el inciso 3° de la mencionada disposición establece: "Los procesos iniciados desde el veinte de abril mil novecientos noventa y ocho, con base en el legislación procesal que se deroga, continuarán tramitándose hasta su finalización conforme a la misma". De manera que, para los efectos de dirimir el conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales indicadas, esta Corte se servirá de la referida normativa derogada, en atención a que el proceso penal, en el cual ocurrieron las declaratorias de incompetencias que nos ocupan, inició antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa procesal penal.

IV. Así, este Tribunal estima necesario referirse a uno de los argumentos dados por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador para declinar conocer del proceso penal relacionado.

Tal argumento radica en que la Fiscalía General de la República, como facultada para decidir si el caso debe ser del conocimiento de un tribunal especializado o de un juez de paz, es del criterio que dicho proceso "debe de ser del conocimiento de la Jurisdicción común, por considerar que el mismo no revestía la modalidad del Crimen Organizado" (sic).

Al respecto, esta Corte ha modificado su criterio jurisprudencial a partir de la resolución del conflicto de competencia con referencia 49-COMP-2010 de fecha 14/12/2010, en cuanto a que la verificación de la competencia de un determinado tribunal, debe ser analizada por éste oportunamente, a efecto de determinar si de la postura fiscal y las diligencias presentadas es posible considerar, mínimamente, su competencia para ejercer la labor jurisdiccional, no estando supeditada esta actividad de verificación al final de la etapa de instrucción del proceso penal.

En dicho precedente jurisprudencial se indicó que si bien el artículo 4 de la ley especial atribuye a la Fiscalía General de la República, a partir de las diligencias de investigación, la determinación inicial de impulsar el proceso ante los juzgados creados en la misma; ello no soslaya la obligación del juez de verificar que efectivamente, de tales diligencias, sea procedente el conocimiento ante su tribunal sobre los hechos delictivos acusados por la Fiscalía.

Precisamente, porque dicha disposición no puede interpretarse como una sumisión de la autoridad judicial a la inicial consideración que la representación fiscal haya tenido para

determinar la competencia de una u otra sede judicial, ya que como se indicó, el juez necesariamente debe verificar, entre otros aspectos, lo relativo a su competencia para ejercer jurisdicción en el caso concreto.

Entonces, la competencia se configura dentro del proceso penal como un presupuesto procesal indispensable para el correcto funcionamiento del sistema de enjuiciamiento de una persona a quien se atribuye la comisión de un delito. Es decir, no son las partes ni el juez los encargados de definir de manera discrecional la sede judicial encargada de dirimir el conflicto penal, sino que la competencia para ello estará determinada por las disposiciones legales reguladoras de este aspecto.

De lo que se trata es de evitar que la competencia judicial alternativa que permite leyes especiales como la relacionada, provoque que el ente acusador, sin ningún control inicial, fije la competencia de un tribunal. Es aquí donde adquiere relevancia la obligación de la Fiscalía de dotar de elementos objetivos mínimos a su petición que permitan identificar las razones del ejercicio de la acción penal en una u otra sede judicial, en virtud del procedimiento común o especial que le deba regir.

De no cumplirse estos parámetros por el ente acusador, el juez está obligado a señalar estas falencias y determinar en cualquier momento, para ese caso, su incompetencia para conocer de la acción penal promovida ante sí y, de esa manera, evitar el incumplimiento de la garantía constitucional y legal para la persona de ser juzgada ante tribunal competente.

Con base en tales razones, lo afirmado en este punto por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador para sostener la competencia del Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, ya ha sido superado a partir de la resolución relacionada y por tanto, tal argumento no es suficiente para sostener su declaración de incompetencia para conocer del presente proceso penal.

V. En cuanto a la controversia planteada en este incidente producto de la negativa de las autoridades judiciales antes relacionadas para conocer del proceso penal, en razón de considerar, por un lado, el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla que: i) el conocimiento del hecho delictivo investigado —homicidio agravado— corresponde por ministerio de ley a la jurisdicción especializada, no obstante que tal circunstancia fue inadvertida por la Fiscalía General de la República; y, ii) la complejidad de la realización del delito puede perfectamente acreditarse o descartarse en dicha sede durante el plazo de instrucción; y, por otro, el Juzgado Especializado de

Instrucción de San Salvador que: i) no se ha logrado establecer en el proceso penal que el ilícito atribuido a los imputados ha sido efectuado por un grupo estructurado perteneciente al crimen organizado; y, ii) el hecho delictivo investigado, si bien se encuentra dentro de la lista taxativa establecida en el artículo 1 inciso 4° de la ley especial, no posee un alto grado de dificultad en su investigación para afirmar que constituye un delito de realización compleja; esta Corte precisa realizar las siguientes acotaciones jurídico-jurisprudenciales relacionadas a la ley especial:

1) El artículo 1 de la ley especial establece, en su inciso primero, que: *"[l]a presente ley tiene como objeto regular y establecer la competencia de los tribunales especializados y los procedimientos para el juzgamiento de los delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado o de realización compleja"*.

Del precepto citado es manifiesto que el legislador ha establecido dos supuestos, independientes entre sí, para la determinación de la competencia material de los tribunales especializados, referidos a los delitos de crimen organizado y los delitos de realización compleja. Ello es menester acotarlo, en tanto que si bien ambas modalidades de delitos pueden ser concurrentes, no se requiere de dicha circunstancia para fijar la competencia de un tribunal especializado, pues bastará con que el delito perseguido reúna las cualidades de uno u otro.

En ese sentido, es que el legislador se ha ocupado de expresar los criterios a considerar para determinar cuándo se está en presencia de un delito de crimen organizado o en uno de realización compleja.

2) Esta Corte ha establecido en su jurisprudencia —véase resolución 4-COMP-2010 de fecha 8/06/2010— las características que deben concurrir para considerar la existencia de un delito cometido en la modalidad de crimen organizado, a partir de los parámetros legales dispuestos en la ley especial, la cual en el inciso segundo del artículo 1 señala que *"[s]e considera crimen organizado aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos"*. Es decir, que para estimar que un hecho delictivo ha sido realizado por una agrupación de crimen organizado debe reunir tales características y solo así corresponderá su juzgamiento conforme al procedimiento y ante los tribunales especializados a que se refiere dicha ley.

En ese orden de ideas, deben existir elementos de prueba que permitan afirmar con probabilidad que se trata de un grupo conformado por dos o más personas, con carácter

permanente y en el que exista concierto entre sus miembros para delinquir, que permitan identificar que la competencia para conocer de los mismos corresponde a la jurisdicción especializada como se ha expresado líneas arriba

3) Por otra parte, el inciso tercero del artículo 1 de la ley especial determina: "Para los efectos de la presente Ley, constituyen **delitos de realización compleja** los enumerados a continuación, cuando se cumpla alguna de las circunstancias siguientes: Que haya sido realizado por dos o más personas, que la acción recaiga sobre dos o más víctimas, o que su perpetración provoque alarma o conmoción social. Dichos delitos son: a) Homicidio simple o agravado; b) Secuestro; y, c) Extorsión" (resaltado suplido).

Al respecto, esta Corte sostiene que **la complejidad a la que se refiere la ley especial**, señala que dicha circunstancia se configura cuando en la ejecución de los hechos hayan concurrido dos o más personas o sobre más de una víctima, y tratarse de uno de los ilícitos del catálogo expresado por el legislador, para el caso el delito de homicidio agravado en grado de tentativa -Art. 1 inciso 3° de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja- pero, **además de reunir los presupuestos materiales que la ley requiere, debe existir un amplio espectro de circunstancias que rodean el hecho**, es decir, que la complejidad no se rige únicamente por la cantidad de personas que intervienen en el ilícito, lo que sería si se interpretara la norma de forma literal; por el contrario, la práctica forense enseña que factores tales como el cuadro fáctico, el escenario del ilícito, los procesos investigativos, en particular la prueba científica, la protección de víctimas y testigos, la recolección de prueba en el exterior, la calidad de las víctimas y victimarios, la ofensa o repudio que el hecho pueda generar, son presupuestos que no pueden descartarse para determinar si el proceso y el mismo juicio, incorporan esas características particulares que, en definitiva, conllevan a considerarlos como de realización compleja y determinar luego quien es el Juez competente para conocer. Recuérdese que el proceso penal es un mecanismo revestido de las garantías constitucionales para el juzgamiento de las personas, de manera que, como se ha expresado anteriormente, la complejidad tienen su origen, no solo en los presupuestos materiales que la citada ley especial regula para su aplicación, sino en los demás factores que se han señalado para su configuración. Véanse las resoluciones de conflicto de competencia 15-COMP-2010, 16-COMP-2010, 17- COMP-2010 y 23-COMP-2010, las primeras tres del día 03-6-2010 y la última de fecha 26-8-2010.

VI.- Continuando con el análisis del presente incidente, y antes de decidir la autoridad

competente para conocer de los hechos delictivos acusados, esta Corte considera necesario señalar los pasajes pertinentes del proceso penal que se utilizarán para ello. Así se tiene:

1. Requerimiento fiscal en contra de los imputados relacionados, suscrito por el licenciado Dionisio Ernesto Alonzo Sosa, presentado ante el Juzgado de Paz de Comasagua, el día cuatro de diciembre de dos mil diez. Del folio 1 al 6.

En dicho requerimiento, específicamente en su preámbulo y en los apartados II, III y IV, denominados en su orden *"relación circunstanciada de los hechos"*, *"calificación jurídica del hecho"* y *"fundamento de la imputación"*, la representación fiscal refirió en síntesis que, en atención a la teoría fáctica y a los elementos de convicción existentes en el proceso penal —entre estos, la entrevista del testigo con clave "Cristian", quien goza de régimen de protección, acta de inspección ocular policial de levantamiento de cadáver y sus respectivos álbum fotográfico y croquis planimétrico, las correspondientes autopsia y reconocimiento médico forense, entre otros— a los incoados **Víctor Manuel Gámez, José René Flores Gámez y José María Flores Gámez** se les atribuye la comisión del delito de *homicidio agravado*, en perjuicio del señor [...].

Asimismo, en el apartado 11 denominado *"relación circunstanciada de los hechos"*, se relaciona: "... [1]os hechos sucedieron (...) el día catorce de marzo de dos mil diez, a eso de las veintiuna horas aproximadamente (...) cuando (...) tres sujetos (...) RENE, alias EL CHEMA (...) JOSE MARÍA, alias EL CHEMA (...) VICTOR, alias TELENGUE (...) mediante amenazas (...) obligaron [al testigo con clave "Cristian"] a caminar a un espacio oscuro (...) posteriormente los sujetos RENE (...) y JOSE MARÍA (...) le dijeron al sujeto VICTOR (...) que se quedara y que vigilara y si llegaba la policía les diera aviso, luego el sujeto RENE (...) saco un arma blanca (corvo) (...) y comenzó a empujarlo con la punta de este, obligándolo a caminar llegando hasta donde se encuentra un taller automotriz (...) y en seguida iba pasando un señor (...) inmediatamente los sujetos RENE (...) y JOSE MARÍA (...) se dirigieron hacia dicho señor (...) le quitaron (...) un arma blanca (corvo) (...) [y] obligaron al testigo y al señor antes descrito a caminar sobre la Calle que conduce al interior de la Finca San Marcos, en donde caminaron un aproximado de treinta minutos (...) [al señor] le quitaron un maletín de tela oscura y la ropa que llevaba puesta dejándolo únicamente en calzoncillo (...) luego (...) [lo] amarraron con el lazo (...) llevándoselo de arrastras (...) introduciéndolo al interior de los árboles de café (...) [el testigo] escuchó que dicho señor dejó de gritar escuchando únicamente golpes como si picaran algo (...) y pasado veinte minutos aproximadamente salieron los sujetos llevando (...) JOSÉ MARIA (...) la

cabeza del señor que habían introducido al interior del cafetal (...) luego salieron caminando como buscando la salida (...) obligaron al testigo a meterse al cafetal llegando donde se ubica un tanque de agua, ordenándole al testigo bajo amenaza (...) que subiera al tanque y que tirara en el interior de este el maletín donde llevaba la cabeza del señor (...) posteriormente lo llevaron al lugar de residencia de estos dejándolo ir hasta el siguiente día, diciéndole mediante amenazas que si decía algo a la policía se las iban a desquitar con la familia del testigo (...) pasados unos días en una ocasión observó al sujeto VICTOR (...) quien lo llamó y le amenazó diciéndole que tuviera cuidado con abrir la boca por que de lo contrario ya sabía lo que le iba a tocar..." (sic).

Finalmente, es necesario destacar que la representación fiscal, en el apartado VII, denominado "*Diligencias útiles y plazo de instrucción*", requirió "... un plazo de instrucción no inferior [de] SEIS MESES, dentro de la cual se practicará las siguientes diligencias: 1. Realizar inspección en el lugar de los hechos y en los alrededores a efecto de indagar la presencia de otro posible testigo. 2) Cualquier otra diligencia útil..." (sic).

2- Acta de inspección ocular policial de levantamiento de cadáver, de las once horas y cincuenta minutos del día quince de marzo de dos mil diez, realizada en el interior de la Finca San Marcos, Tablón El Carmen, jurisdicción de Villa de Comasagua, departamento de La Libertad, en la que consta la descripción y procesamiento de la escena del hecho investigado, y en especial los hallazgos, ubicación y recolección de evidencias relacionados a tal ilícito. Así como sus respectivos álbum fotográfico y croquis planimétrico. Del folio 12 al 14, 32 al 50 y 51, respectivamente.

3. Entrevista del testigo con clave "Cristian", quien goza de régimen de protección para víctimas y testigos, en la que consta la forma de cómo ocurrió el delito investigado —aspectos de modo, tiempo, lugar y personas—, tal y como ha sido relacionado en el requerimiento fiscal. Folios 60 y 61.

4. Acta de inspección practicada, en calidad de diligencia inicial de investigación, en el Tablón El Carmen y Tablón El Charcón de la finca San Marcos, jurisdicción de Comasagua, departamento de la Libertad, el día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por parte de la Fiscalía General de la República, los agentes investigadores y los miembros del Equipo de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil, con la participación del testigo con clave "Cristian", por medio de la cual se documentan tanto el reconocimiento como señalamiento realizado por dicho testigo respecto de los distintos lugares donde se llevaron a cabo los actos

anteriores, concomitantes y posteriores al hecho delictivo investigado. Así como los respectivos álbum fotográfico y croquis planimétrico. De folios 69 y 70, del 71 al 93, y 94, respectivamente.

5. Autopsia N° A-10-208, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diez, suscrita por el doctor Romeo Antonio Piche, practicada al señor [...], en la que consta como causa de muerte de este: "[h]eridas de tórax producidas por arma blanca". Asimismo, se relaciona: "[a]l examen externo decapitado y con veinticuatro heridas de bordes regulares y lisas, producidas con arma blanca y distribuidas en tórax, abdomen, espalda, hombro, antebrazo y región inguinal izquierda". De folio 16 al 20.

6. Actas de anticipos de prueba consistentes en reconocimiento en rueda de personas, de fecha seis de diciembre de dos mil diez, por medio de las cuales se documenta que el testigo con clave "Cristian" reconoce a los imputados como los que participaron en el hecho delictivo investigado. Del folio 156 al 158.

7. Acta de audiencia inicial realizada por el Juzgado de Paz de Comasagua, de las once horas con treinta minutos del día seis de diciembre del año dos mil diez, en la cual se señala, después de relacionar los elementos de prueba que se encuentran incorporados en el proceso penal, que "... existen los elementos de convicción suficientes, para ordenar la etapa instructora contra los procesados VICTOR MANUEL GAMEZ, JOSÉ RENÉ FLORES GAMEZ Y JOSÉ MARÍA FLORES GAMEZ, por ser los autores y los partícipes directos en el presente proceso... "(sic); así como también se ordena la instrucción formal del proceso penal y se impone a estos la medida cautelar de detención provisional. Del folio 159 al 163.

VII.- A partir de los criterios jurisprudenciales sostenidos por esta Corte en los considerandos IV y V de esta resolución, y de los pasajes del proceso penal que se han relacionado en el considerando precedente, los cuales acompañan el requerimiento de la Fiscalía General de la República, se concluye:

De acuerdo a la relación de los hechos contenida en el requerimiento fiscal, construida a partir de la entrevista rendida por el testigo con clave "Cristian" y de los demás elementos de prueba incorporados al proceso penal a la fecha de promoverse el presente conflicto de competencia, se advierte que en el hecho delictivo investigado participaron tres personas, quienes en horas de la noche del día catorce de marzo de dos mil diez y mediante el uso de arma blanca —corvo— obligaron al testigo protegido a conducirse con dirección a una finca de nombre San Marcos de la jurisdicción de Comasagua; y que en dicho trayecto uno de estos se quedó

cumpliendo funciones de vigilancia, a fin de alertar a los demás si se apersonaba a la zona la autoridad policial, mientras que estos continuaron su rumbo junto con el testigo. Posteriormente, los dos sujetos mediante el uso de armas blancas —corvos--obligaron a la víctima —una vez que fue interceptada por estos— a conducirse también hacia la finca antes mencionada; y en tal lugar dichos sujetos "arrastraron" a la víctima hacia el interior de un cafetal, donde le ocasionaron diversas lesiones en distintas partes del cuerpo producidas con arma blanca, las cuales le causaron la muerte, y además procedieron a decapitarla; luego los mismos sujetos le exigieron al testigo protegido que se trasladara con ellos a otro lugar que se encuentra ubicado en la misma zona, en donde lo obligaron a lanzar la cabeza de la víctima en el interior de un tanque. Finalmente, se advierte que los tres sujetos que participaron en el hecho delictivo antes indicado amenazaron al referido testigo en causar perjuicios en su contra y de su familia si daba aviso a las autoridades de lo que había acontecido.

Así, la representación fiscal y el Juzgado de Paz de Comasagua han calificado jurídicamente, y de forma provisional, tales hechos como *homicidio agravado*, y han determinado, principalmente a través de la entrevista del testigo protegido con clave "Cristian y de los anticipos de prueba de reconocimiento en rueda de personas, que los autores del tal ilícito son con probabilidad los incoados *Víctor Manuel Gámez, José René Flores Gámez y José María Flores Gámez*, según consta en el requerimiento fiscal y en el acta de audiencia inicial, respectivamente.

En ese sentido, esta Corte advierte que en el caso concreto se cumplen los presupuestos materiales señalados en los incisos 3° y 4° del artículo 1 de la ley especial, relacionadas para determinar que el hecho se realizó bajo la modalidad compleja —por tratarse de uno de los delitos que de manera taxativa el legislador ha dispuesto como tal, y en virtud de que concurren una de las circunstancias allí mencionadas, siendo esta, por haberse realizado por dos o más personas—.

Sin embargo, es de advertir que, tal como se ha señalado anteriormente, la complejidad del delito a que se refiere la ley especial no se rige únicamente por la cantidad de sujetos activos del ilícito, sino que además debe verificarse las condiciones que rodearon la ejecución del delito y el proceso investigativo que el mismo ha requerido o requerirá, para determinar si resulta procedente su consideración bajo la modalidad de realización compleja, y determinar luego quién es el juez competente para conocer del proceso penal.

A ese respecto, el fundamento sobre el que descansa la atribución de participación de los imputados en el delito —homicidio agravado— se desprende, principalmente, de la entrevista y de los anticipos de prueba consistentes en reconocimientos en rueda de personas rendida y practicados por el testigo protegido con clave "Cristian", quien es el encargado de señalar concretamente a cada uno de los procesados y la actividad que ejercieron en la comisión del delito en perjuicio de la víctima.

Es así que, tal como lo relaciona dicho testigo en su entrevista, las condiciones en las que se ejecutó la actividad delictiva, aunado al proceso investigativo efectuado y que se pretende se complete durante la etapa de la instrucción del proceso penal, así como lo dificultoso que resultaría la producción de tales elementos de prueba en una eventual vista pública, revelan una complejidad tal que requieren un tratamiento diferenciado a través de la aplicación de la ley especial, precisamente por las particularidades que se observan respecto del cuadro fáctico planteado y del escenario del ilícito.

Y es que, del cuadro fáctico planteado se advierte la concurrencia de diversas acciones delictivas en contra de la víctima y del testigo que goza de régimen de protección con clave "Christian", entre las que se encuentra el hecho investigado —homicidio agravado—, en el cual participaron más de dos personas —en total tres—, quienes de acuerdo a la distribución de roles uno de ellos cumplió funciones de vigilancia, a fin de alertar a los otros acerca de una posible presencia policial en la zona, y los demás ejecutaron materialmente el delito, aprovechándose de las condiciones de lugar —zona despoblada, por tratarse de un cafetal ubicada en la finca San Marcos de la jurisdicción de Comasagua—, de tiempo —en horas de la noche—, y de modo —haciendo uso de armas blancas "corvos"—, entre otros aspectos.

Asimismo, y a partir de lo que consta en el expediente del proceso penal respectivo, esta Corte denota que la escena en la que se cometió el ilícito es de tipo prolongada, la cual por sus propias particularidades ha implicado un mayor esfuerzo investigativo de parte de las autoridades correspondientes, precisamente porque el referido escenario es de gran tamaño geográfico, en la que se llevaron a cabo una serie de sucesos anteriores, concomitantes y posteriores a la ejecución del delito —homicidio agravado— que no pierden su correlación, entre estos, la privación de libertad de la víctima y del testigo, el traslado y permanencia de estos en el lugar donde se consumó el hecho, la liberación del cuerpo y de la cabeza de la víctima en lugares distintos, las amenazas sufridas por el testigo.

En consecuencia, esta Corte advierte que en razón de los aspectos antes detallados las autoridades a cargo de la investigación han tenido que practicar distintas diligencias y actos de prueba, entre estas, levantamiento de cadáver de la víctima, autopsia, ubicación de testigos, reconocimiento en rueda de personas, inspección en el lugar de los hechos, entre otras, para establecer la existencia de la infracción penal, así como una plena identificación, individualización y participación de los incoados como autores o partícipes de tales hechos; sin perjuicio, de que durante la etapa de instrucción se lleven a cabo otras diligencias o actos que sean necesarios —a criterio de estos— para tales fines, como son las diligencias útiles señaladas en el requerimiento fiscal —"inspección en el lugar de los hechos y en los alrededores a efecto de indagar la presencia de otro posible testigo" —.

En atención a todo lo antes expuesto, esta Corte estima que, del estado actual en que se encuentra el proceso penal, se cumplen requisitos mínimos de complejidad necesarios para determinar que el ilícito de *homicidio agravado*, en perjuicio del señor [...], constituye delito de realización compleja.

Ahora bien, resulta innecesario pronunciarse si los hechos antes relacionados han sido cometidos bajo la modalidad de crimen organizado, en la medida que basta con verificar si estamos en presencia de alguna de las dos modalidades previstas en la ley especial en cuestión, para determinar la competencia del caso en concreto.

En consecuencia, por constituir el hecho investigado en el presente caso —homicidio agravado— un delito de realización compleja, deberá ser del conocimiento del Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador; por tanto, el presente proceso penal será remitido a dicho Juzgado para tal efecto.

Además, y tal como esta Corte lo ha considerado en su jurisprudencia —véase la resolución 66-COMP-2009 de fecha 2/02/2010-, en atención al principio de celeridad del proceso, por el derecho fundamental que tienen los imputados de ser juzgados en un plazo razonable y así obtener certeza respecto de su situación jurídica en el hecho que se les acusa, por principio de economía procesal y, sobre todo, con el fin de evitar dilaciones innecesarias en su tramitación, en cumplimiento a las atribuciones que confiere a los tribunales la Constitución de la República en lo relativo a la administración de pronta y cumplida justicia, debe impulsarse oportunamente el proceso penal en el que se ha generado el conflicto que mediante esta decisión se dirime.

VII. Para finalizar esta Corte advierte que, con el objeto de que se resolviera el conflicto de competencia suscitado entre las autoridades aludidas, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador remitió el expediente judicial en el que consta la documentación original de las actuaciones efectuadas en el proceso. De ello es menester hacer las siguientes consideraciones:

Los artículos 67 y siguientes del Código Procesal Penal se refieren a la decisión de algunas cuestiones de competencia que pueden suscitarse en la tramitación de un proceso penal, entre ellos los conflictos generados entre los jueces que se declaran simultáneamente competentes o incompetentes para conocer de aquel.

Estas cuestiones de competencia tienen por objeto fijar un presupuesto previo a la decisión del asunto penal principal planteado: el juez o tribunal que deberá resolverlo. Por lo tanto, ellas no involucran la determinación de la existencia del delito y de la participación del imputado en el mismo y su resolución solamente señala a la autoridad judicial a quien corresponde pronunciarse —provisional o definitivamente— sobre los extremos de la imputación.

Las referidas cuestiones constituyen entonces, por su naturaleza, asuntos incidentales que se intercalan en el curso del proceso y que deben ser planteadas y dirimidas antes de que se emita la decisión final sobre la imputación formulada, lo cual se realiza, según el procedimiento común, mediante el fallo del tribunal de sentencia luego de finalizada la vista pública.

Al ser cuestiones incidentales dentro del proceso penal, que no implican un pronunciamiento sobre los presupuestos de la imputación, transfieren al tribunal que los decide facultades limitadas a la determinación de la autoridad judicial competente para conocer de cada caso, pues es evidente que no se trata de una etapa más del proceso penal.

Lo anterior es coherente con lo establecido en el artículo 71 del Código Procesal Penal que señala que *"las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción ni la audiencia preliminar"*. Dicha disposición regula el efecto que, dentro del proceso penal, genera el surgimiento de un conflicto de competencia, determinando que, si este se suscita hasta la audiencia preliminar e inclusive durante ella, no suspenderá el trámite del proceso penal. Con ello es indudable que el juez o tribunal penal continúa en control de los actos del proceso mientras simultáneamente se decide el conflicto propuesto, lo cual únicamente puede sostenerse al considerar a las cuestiones de competencia como lo que son, es decir asuntos incidentales.

Con fundamento en lo expresado, cuya conclusión primordial es que el conflicto de competencia no retira el conocimiento del proceso penal del juez o tribunal que planteó dicho

incidente, debe señalarse la inconveniencia que puede generar la remisión de los expedientes judiciales a esta Corte, pues estos al contener los pasajes que documentan las actuaciones efectuadas dentro del proceso deben permanecer en poder del juez o tribunal encargado de este mientras se decide el incidente de competencia suscitado.

De forma que en oportunidades posteriores, en ocasión de dirimir un conflicto de competencia, únicamente deberán ser remitidas a este tribunal, copias certificadas de todos los pasajes del expediente penal que sean pertinentes para resolver el mismo.

Con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 15 y 182 atribución segunda de la Constitución, 1 y 4 de la Ley Especial contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, 2, 3, 50 número 2, 58, 67, 68 y 71 del Código Procesal Penal derogado, 505 incisos 1° y 3° del Código Procesal Penal vigente, esta Corte **RESUELVE:**

1. DECLÁRASE COMPETENTE, en razón de la materia, al Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador a fin de que conozca del presente proceso penal.

2. REMÍTASE el expediente del proceso al Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador; y, **ENVÍESE** a éste certificación de la presente resolución, para su cumplimiento.

3. CERTIFÍQUESE esta resolución al Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, para su conocimiento.

J. B. JAIME-----PERLA J.-----J. N. CASTANEDA S.-----E. S. BLANCO-----R. E. GONZÁLEZ-----M. REGALADO-----M. POSADA-----M. A. CARDOZA A.-----
ILEGIBLE-----RUBRICADAS.

PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LA SUSCRIBEN